

URGENTE REITERACION COMPETENCIA Y MEDIDA 08001310500320241002000

Desde Jorge Arturo Rivera Tejada <jriveratejada@hotmail.com>

Fecha Mié 20/11/2024 10:30

Para Juzgado 03 Laboral Circuito - Atlántico - Barranquilla <lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (2 MB)

URGENTE REITERACION COMPETENCIA Y MEDIDA 08001310500320241002000.pdf; SOPORTES PQR NO RESUELTA.pdf;

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, aclarando que me presente para JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO, en primer lugar me permito reiterar su competencia en el presente asunto, sobre esto el **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ BOGOTÁ D. C., SEIS (6) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-02120-00, CONTRA LA ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, indico:

Se invocan aquí los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad considerando que consideran vulnerados por la accionada a través del “IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL PARA ASPIRANTES A CARGOS DE MAGISTRADOS/AS Y JUECES DE LA REPÚBLICA EN TODAS LAS ESPECIALIDADES, PROMOCIÓN 2020-2021”.

Lo pretendido entonces es que mediante la presente tutela, se le ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla aplazar las evaluaciones programadas para el 19 de mayo y 2 de junio de 2024, modificar el cronograma y el modelo pedagógico que se está implementando para evaluar el curso y cambiar la modalidad del examen para que sea presencial y no virtual.

Pues bien, se advierte que el 24 de abril de 2024 el titular del Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca admitió la acción de tutela 81001-33 33-003-2024-00058-00, cuyos accionantes son los señores Deyson Javier Santa Rodríguez, Christian Medina Rojas, María Fernanda Carrillo Pérez, Ana Lucía Bermúdez, Lily Johana Cardozo Restrepo, Edna Andrea Cepeda Vargas, José Leibniz Ledesma Romero, Paula Andrea Ramírez Arboleda, Emi Jesús Ovallos Silva, Yahaira Teresa Pacheco González, Víctor Hugo Quintero Balcázar, Marcela Chaves Álava, Ana Rita Oliveros Oyola, Alejandro José Barraza García, Paola Villegas Roldan, Karla Viviana Grisales Botero, María Jaimes Consuegra, Carlos Andrés Godoy Pérez, John Fredy Pinzón Atehortúa, Daniel Felipe Díaz Guevara, Juan Sebastián Muñoz Fernández, Sebastián Camilo Moreno Guerrero, Carlos Alberto Mendoza Vélez, Eder Fabián López Solarte, Marcela Ramírez Sarmiento, Diana Alexandra Castañeda Guerrero, Ingrid Sofía Olmos Munroe, Karina Causil Archbold, Malory Andrea Cruz Galán, Linda Barbosa, Eduardo Henao, Juan C. Aristizábal, Maira

Milena Solís Rodríguez, Sonia Milena Vargas Gamboa, Ángela Arbeláez, Andrés Felipe Velásquez Gallego, Paula Andrea García Gómez, Yesid Arturo Correa y John Eduardo Matiz Gaitán y la accionada es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la cual guarda relación con los hechos y las pretensiones que dieron lugar a la interposición del presente trámite constitucional, esto es, mejorar las garantías del IX curso de formación judicial.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

Primero: Remitir, por Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto.

1. Competencia del Despacho para conocer esta acción de tutela

Dado que a la presente oficiosamente se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019; es que, solicito desestimar cualquier manifestación que refiera a la falta de competencia de su Despacho para conocer la presente acción.

Para ello, pido tener en cuenta que reiterativamente la Corte Constitucional ha expuesto que la vinculación al extremo pasivo de nuevos sujetos, no altera la competencia del Juez al que fue repartida la tutela; por ejemplo, en Auto A-403/23 que versa sobre un conflicto de competencia suscitado por la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura a una AT, la Corte indicó: "... En el mismo sentido, el referido juzgado consideró que, por ser necesaria la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura, la competencia de la tutela le correspondía a otra autoridad, de acuerdo al inciso 1° numeral 8° de la precitada norma de reparto. Esa decisión contradice la línea jurisprudencial de esta Corte, que ha señalado que la vinculación de una entidad al trámite de tutela no es motivo para apartarse del conocimiento del asunto (...) En efecto, la decisión de declarar la falta de competencia fundamentada en normas de reparto y en modificar la competencia por la eventual vinculación de alguna autoridad jurisdiccional, no se aviene con los fines y principios que rigen la acción de tutela y dificulta una pronta solución al caso. (...) RESUELVE... TERCERO. ADVERTIR al Juzgado... que, en lo sucesivo, observe con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, relacionadas con el alcance de las normas de reparto y el análisis a priori de la eventual vinculación de accionados, y se abstenga de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional."

Sobre la competencia en cuestión de acción de tutela se debe indicar que la **CORTE CONSTITUCIONAL EN AUTO VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) MAGISTRADA PONENTE: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA**, sobre la competencia indico:

1. *Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto.* La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de

Administración de Justicia– (en adelante, LEAJ)^[1]. Asimismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad

encargada de resolverlos^[2] o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba

pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[3]. En el presente asunto, los despachos involucrados pertenecen a la jurisdicción ordinaria, tienen diferentes especialidades jurisdiccionales y pertenecen a distintos distritos judiciales, por lo que el presente conflicto

negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia^[4]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

2. *Factores de competencia en relación con acciones de tutela.* La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el

factor territorial^[5], (ii) el factor subjetivo^[6] y (iii) el factor funcional^[7]. Al respecto, esta Corte ha sostenido que, cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, “en virtud del criterio a prevención”^[8], previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto, por cuanto “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover”^[9]. Asimismo, la Corte ha reiterado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante^[10], o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales^[11]. En estos casos, la competencia corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la presunta vulneración o del lugar donde se producen los efectos, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.

REITERACIÓN MEDIDA CAUTELAR Y PERJUICIO IRREMEDIABLE

Se reitera la solicitud de conceder la medida provisional, toda vez que el día de hoy la Escuela de tajo indico que no resolverá las solicitudes de corrección aun cuando esta expresamente regulada por el **ARTICULO 45 DEL CPACA**, donde se indica:

ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Lo están desconociendo y existe plena regulación, ahora bien tampoco resolverán las de **ADICIÓN Y CORRECCIÓN**, cuando se tiene sobre esto el **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020), RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2019-05011-00(AC), ACTOR: MARÍA JOHANA TABORDA LEIVA, DEMANDADO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO**, indico:

Del recuento que antecede, la Sala observa que las inquietudes planteadas por la accionante a través de su recurso de reposición, al coincidir con argumentos expuestos por otros participantes de la convocatoria, fueron agrupados en diferente temáticas, siendo atendidos cada uno de ellos; sin embargo, no ocurrió lo mismo con los pedimentos expuestos a través del escrito de ampliación del recurso, consistentes en:

«[...] PRIMERO: Se revise y se corrijan las preguntas números 61, 65, 98, 100 y 103, de la prueba de conocimiento, en el marco de la convocatoria número 27, para proveer el cargo de jueces y Magistrados, las cuales fueron contestadas de forma correcta por a suscrita, pero que la clave de coincidencia aportada por la Universidad es errónea.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se proceda a emitir una nueva calificación a la suscrita, teniendo en cuenta que las preguntas números 61, 65, 98, 100 y 103 constituyen aciertos, conforme a la marcación de la suscrita en la hoja de respuesta y lo expuesto en la presente solicitud. [...]».

Con fundamento en lo expuesto, ante la falta de respuesta de la administración a las solicitudes debidamente elevadas ante ella, lo cual constituye la vulneración no solo del derecho fundamental de petición sino también al debido proceso, la Sala ACCEDERÁ a la solicitud de amparo; razón por la cual, se ORDENARÁ a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura – Universidad Nacional de Colombia que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, decidan acerca de los pedimentos elevados por la señora María Johana Taborda Leiva en su escrito de ampliación del recurso de

reposición, interpuesto contra la Resolución CJR19-0877 del 28 de octubre de 2019. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala no desconoce el decir de las entidades accionadas en cuanto a no poder adelantar actuación alguna hasta tanto se resuelva lo pertinente acerca de la solicitud de aclaración dentro de la acción de tutela que ordenó una nueva exhibición de documentos^[12]; frente a lo cual se advierte, que el decidir de fondo el recurso interpuesto por la accionante contra los resultados obtenidos en su prueba de conocimiento, no tiene injerencia alguna en la decisión constitucional que se pueda adoptar, pues lo que aquí se protege, no es cosa distinta que el derecho de cualquier ciudadano a obtener una repuesta de la administración con ocasión de los pedimentos que ante ella puede elevar.

De acuerdo a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

Para lo cual aporte las pruebas de que no resolverán:

Trazabilidad por orden cronológico

Escalado

C

Descripción: Cordial saludo estimado (a) discente: con relación a su solicitud identificada con el número de ticket 26627, le confirmo que ha sido atendida y escalada al área correspondiente. Esperamos que nuestro soporte sea satisfactorio para usted.

Fecha: 18-11-2024

Resuelto

MS

Descripción: Respetado Discente. En atención a su solicitud, le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa concluyó con la notificación de los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución EJR24-298, expedida por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

Fecha: 19-11-2024

Por lo tanto, debe ser concedida la medida cautelar y obligarlos resolver de manera congruente y sumar los untos que no han sumado, se reitera que se esta frente a un perjuicio irremediable, sobre la anterior urgencia es plenamente aplicable al caso concreto donde se observa un perjuicio irremediable, en este caso referente a la **CONVOCATORIA 27** la **CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA SU067 DEL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), MAGISTRADA PONENTE: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA**, indico:

La acción de tutela interpuesta en el proceso T-8.375.379 satisface el requisito de subsidiariedad. Es preciso indicar que la acción de tutela interpuesta por María Eugenia Rangel Guerrero no cuestionó la legalidad del acuerdo de convocatoria, como parecen entenderlo las autoridades judiciales que resolvieron su pretensión en el trámite de instancia. Por consiguiente, no es válido afirmar que debió encauzar su reclamación mediante los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011. La demandante, por el contrario, solicitó que se le permita modificar el cargo para el cual se inscribió en la Convocatoria n.º 27; de este modo, procura satisfacer sus derechos fundamentales al acceso a los cargos públicos y al trabajo. Para tal efecto, ejerció su derecho fundamental de petición a través de la presentación del documento que dio inicio al proceso que aquí se revisa.

Habida cuenta de lo anterior, corresponde a la Sala Plena establecer si la respuesta negativa que obtuvo dicha solicitud implica una violación de su derecho fundamental al acceso a los cargos públicos, tal como la accionante lo pretende. En principio, este asunto podría ser planteado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. **Sin embargo, en el caso concreto se configura el supuesto del perjuicio irremediable. Esto es así dado que, teniendo en cuenta la duración de los procesos ante la justicia administrativa, es altamente probable que la**

decisión de esta pretensión sea dictada una vez ya haya concluido el concurso de méritos. En razón de lo anterior, la acción de tutela de la demandante será analizada bajo el supuesto de la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

De igual forma el órgano de cierre en lo penal pues la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL MAGISTRADO PONENTE LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA**TP5284-2023 CIU 11001023000020230033500, RADICACIÓN #129939, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023), indico:

La Corte Constitucional, entonces, estableció específicamente tres reglas para la procedencia de la tutela contra los concursos de méritos de la Rama Judicial. La primera atinente a la inexistencia de un mecanismo judicial que permita reclamar la protección del derecho fundamental vulnerado. La segunda pauta se centra en la configuración de un perjuicio irremediable, y la última, está relacionada con que el asunto planteado desborde las competencias del juez administrativo (Sentencia CC SU-067/2022).

En el presente asunto, atendidas sus precisas particularidades, la Sala advierte la procedencia de la acción de tutela para resolver el debate propuesto. Esto surge como resultado de la configuración inminente de un perjuicio irremediable, así como del tema constitucional planteado, el cual trasciende la esfera habitual de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y evidencia la vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Para la Corte resulta evidente que la espera prolongada de una decisión judicial al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho puede llevar al desconocimiento de los principios constitucionales de carrera administrativa y mérito. Estos pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho se ven amenazados, como se indicó, en situaciones en las que la sentencia podría retrasarse y consolidar la afectación que se pretende impedir. (TENGO MÁS DE DOS AÑOS DESDE QUE COLOQUE LA DEMANDA Y AUN NO SE TIENE PRIMERA AUDIENCIA)

Sumado a ello, la eventualidad de que ya no existan vacantes para ocupar un empleo igual o equivalente al aspirado también pone en evidencia los riesgos asociados con la dilatación de la actuación procesal. En tales circunstancias, aunque el afectado obtenga una determinación favorable, se encontraría ante la imposibilidad material de ocupar el cargo deseado. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Sobre casos así en los concursos de mérito la **CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA T-052 MAGISTRADO PONENTE: DR. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL NUEVE (2009)**, indico: En este caso, considera la Sala que, si bien el mecanismo ordinario para controvertir el acto administrativo en debate es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el anterior instrumento no resulta idóneo para garantizar la real y efectiva protección de los derechos del accionante toda vez que este procedimiento ordinario supone unos trámites que no concluirían de manera oportuna, es decir, antes de que se adopten las decisiones determinantes sobre el acceso a los cargos de notario para los cuales se concursó. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Con relación a la procedencia de la acción de tutela interpuesta como consecuencia de una irregularidad dentro de un concurso de mérito, esta Corporación ha sostenido que:

“En lo que hace referencia a los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la Corte ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela, a pesar de la presencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta última no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.” (Sentencia T-514 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández).^[21]

Por consiguiente, encuentra esta Sala procedente la acción de tutela interpuesta, como mecanismo principal. En este caso, la acción de tutela viene a suplir el espacio de desamparo o desprotección del derecho fundamental que deja el mecanismo alternativo de defensa judicial, por no ser adecuado y carecer del atributo de la eficacia requerida para la efectiva y real protección del referido derecho fundamental. Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

“La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la

demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite que se subplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias”.^[22]

Y se reitera ya van 20 despachos judiciales que han otorgado la mediana cautelar en la acción de tutela.

ANEXOS

- Constancias de que la Escuela Judicial no otorgara los puntos que solicite mediante corrección ya que ni siquiera resolverá las solicitudes.

PRETENSIONES

Teniendo en cuenta los fundamentos facticos y de derecho que sustentan la presente acción de tutela, además del acervo probatorio que se recaude dentro del trámite de la acción, solicito acceder a las siguientes pretensiones: **TUTELAR** mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legítima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, **ORDENAR** a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:

En virtud de la negativa a sumar los puntos solicitados en la **CORRECCIÓN EXPIDA** un acto administrativo en el que: i) reconozca como acertadas las respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos indicados en la presente acción constitucional en concordancia con la solicitud de **ADICIÓN Y ACLARACIÓN** ii) **DISPONGA** la **CORRECCIÓN ARITMÉTICA** de las preguntas que me fueron otorgadas y no sumadas iii) **DISPONGA** mi **inclusión definitiva o transitoria** en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerarse la anterior orden, pido que se **DISPONGA** mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.

Para ello, **pido tener en cuenta las mismas razones que expuse frente a la medida provisional solicitada**, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad accionada, dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la totalidad de los dicentes que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la accionada realizar una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación presupuestal distinto a lo ya previsto.

Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy convencido que son— y para ese momento no he realizado la subfase especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que inician dicha subfase el próximo **16/11/2024**, dadas las consecuencias que ello trae frente a la conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio de 2025, término que, conforme a las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada del proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión principal.

ANEXOS

- Providencia proferida por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA dentro de la radicación 08-001-33-33-013-2023-00184-00.
- Providencia fechada 23 de octubre del 2023 proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO dentro de la radicación 52-001-33-33-005-2023-00202.

- Providencia fechada 19 de octubre del 2023 proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA dentro de la radicación 150013333003-2023-00139-00.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.

Mail: jrivatejada@hotmail.com.

Celular: 3008397537



Jorge Arturo Rivera Tejada

Derecho Laboral Individual y Colectivo, Administrativo Laboral, Laboral Constitucional

jrivatejada@hotmail.com

Celular: 3008397537

[1] Auto 550 de 2018. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela debe determinarse de conformidad con lo previsto por los artículos 17, 18, 37 y 41 de la LEAJ.

[2] Cfr. Autos 003 de 2018, 050 de 2018, 158 de 2018 y 262 de 2018, entre otros.

[3] Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991. Cfr. Autos 243 de 2012 y 495 de 2017, entre otros.

[4] Artículo 18 de la LEAJ: *“Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación”.*

[5] Auto 550 de 2018. En virtud del factor territorial, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o donde se producen sus efectos, son competentes para conocer, *“a prevención”*, del trámite de las acciones de tutela.

[6] Auto 550 de 2018. Con fundamento en el factor subjetivo, corresponde: (i) a los jueces del circuito, el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.

[7] Auto 550 de 2018. El factor funcional *“debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia”.*

[8] Auto 018 de 2019. Cfr. Autos 222 y 010 de 2020, 068 de 2018 y 053 de 2018, entre otros.

[9] Autos 074 de 2016 y 277 de 2002.

[10] Auto 460 de 2019 y 299 de 2013.

[11] Auto 460 de 2019 y 086 de 2007.

[12] CP. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Expediente 11001031500020190131001.



JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Y COLECTIVO
DERECHO CONSTITUCIONAL LABORAL, ADMINISTRATIVO LABORAL, DERECHO DE TRANSITO

CARTAGENA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

SEÑORES

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Juzgado 03 Laboral - Atlántico - Barranquilla lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. M

RADICACIÓN: 08001310500320241002000

DEMANDANTE: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

DEMANDADO: ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA

JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, mayor de edad y vecino de Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía número 72.346.928 de Barranquilla, aclarando que me presente para JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO, en primer lugar me permito reiterar su competencia en el presente asunto, sobre esto el **CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ BOGOTÁ D. C., SEIS (6) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-02120-00, CONTRA LA ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA**, indico:

Se invocan aquí los derechos fundamentales a la educación y a la igualdad considerando que consideran vulnerados por la accionada a través del “IX CURSO DE FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL PARA ASPIRANTES A CARGOS DE MAGISTRADOS/AS Y JUECES DE LA REPÚBLICA EN TODAS LAS ESPECIALIDADES, PROMOCIÓN 2020-2021”.

Lo pretendido entonces es que mediante la presente tutela, se le ordene a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla aplazar las evaluaciones programadas para el 19 de mayo y 2 de junio de 2024, modificar el cronograma y el modelo pedagógico que se está implementando para evaluar el curso y cambiar la modalidad del examen para que sea presencial y no virtual.

Pues bien, se advierte que el 24 de abril de 2024 el titular del Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca admitió la acción de tutela 81001-33 33-003-2024-00058-00, cuyos accionantes son los señores Deyson Javier Santa Rodríguez, Christian Medina Rojas, María Fernanda Carrillo Pérez, Ana Lucía Bermúdez, Lily Johana Cardozo Restrepo, Edna Andrea Cepeda Vargas, José Leibniz Ledesma Romero, Paula Andrea Ramírez Arboleda, Emi Jesús Ovallos Silva, Yahaira Teresa Pacheco González, Víctor Hugo Quintero Balcázar, Marcela Chaves Álava, Ana Rita Oliveros Oyola, Alejandro José Barraza García, Paola Villegas Roldan, Karla Viviana Grisales Botero, María Jaimes Consuegra, Carlos Andrés Godoy Pérez, John Fredy Pinzón Atehortúa, Daniel Felipe Díaz Guevara, Juan Sebastián Muñoz Fernández, Sebastián Camilo Moreno Guerrero, Carlos Alberto Mendoza Vélez, Eder Fabián López Solarte, Marcela Ramírez Sarmiento, Diana Alexandra Castañeda Guerrero, Ingrid Sofía Olmos Munroe, Karina Causil Archbold, Malory Andrea Cruz Galán, Linda Barbosa, Eduardo Henao, Juan C. Aristizábal, Maira Milena Solís Rodríguez, Sonia Milena Vargas Gamboa, Ángela Arbeláez, Andrés Felipe Velásquez Gallego, Paula Andrea García Gómez, Yesid Arturo Correa y John Eduardo Matiz Gaitán y la accionada es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la cual guarda relación con los hechos y las pretensiones que dieron lugar a la interposición del presente trámite constitucional, esto es, mejorar las garantías del IX curso de formación judicial.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

Primero: Remitir, por Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado 3 Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo expuesto.

1. Competencia del Despacho para conocer esta acción de tutela

Dado que a la presente oficiosamente se vinculó al Consejo Superior de la Judicatura, a la Unidad de Administración de Carrera Judicial y al Unión Temporal IX Curso de Formación Judicial 2019; es que, solicito desestimar cualquier manifestación que refiera a la falta de competencia de su Despacho para conocer la presente acción.

Para ello, pido tener en cuenta que reiterativamente la Corte Constitucional ha expuesto que la vinculación al extremo pasivo de nuevos sujetos, no altera la competencia del Juez al que fue repartida la tutela; por ejemplo, en Auto A-403/23 que versa sobre un conflicto de competencia suscitado por la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura a una AT, la Corte indicó: "... En el mismo sentido, el referido juzgado consideró que, por ser necesaria la vinculación del Consejo Superior de la Judicatura, la competencia de la tutela le correspondía a otra autoridad, de acuerdo al inciso 1º numeral 8º de la precitada norma de reparto. Esa decisión contradice la línea jurisprudencial de esta Corte, que ha señalado que la vinculación de una entidad al trámite de tutela no es motivo para apartarse del conocimiento del asunto (...) En efecto, la decisión de declarar la falta de competencia fundamentada en normas de reparto y en modificar la competencia por la eventual vinculación de alguna autoridad jurisdiccional, no se aviene con los fines y principios que rigen la acción de tutela y dificulta una pronta solución al caso. (...) RESULEVE... TERCERO. ADVERTIR al Juzgado... que, en lo sucesivo, observe con estricto rigor la jurisprudencia de esta Corte sobre los conflictos de competencia en materia de tutela, en especial las reglas reiteradas en las consideraciones del presente auto, relacionadas con el alcance de las normas de reparto y el análisis a priori de la eventual vinculación de accionados, y se abstenga de formular conflictos aparentes de competencia que demoren las decisiones que debe adoptar como juez constitucional."

Sobre la competencia en cuestión de acción de tutela se debe indicar que la **CORTE CONSTITUCIONAL EN AUTO VEINTINUEVE (29) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) MAGISTRADA PONENTE: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA**, sobre la competencia indico:

1. *Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto.* La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de Administración de Justicia– (en adelante, LEAJ)¹. Asimismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos² o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia³. En el presente asunto, los despachos involucrados pertenecen a la jurisdicción ordinaria, tienen diferentes especialidades jurisdiccionales y pertenecen a distintos distritos judiciales, por lo que el presente conflicto negativo de competencia debió ser resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia⁴. Sin embargo, en aplicación

¹ Auto 550 de 2018. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela debe determinarse de conformidad con lo previsto por los artículos 17, 18, 37 y 41 de la LEAJ.

² Cfr. Autos 003 de 2018, 050 de 2018, 158 de 2018 y 262 de 2018, entre otros.

³ Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991. Cfr. Autos 243 de 2012 y 495 de 2017, entre otros.

⁴ Artículo 18 de la LEAJ: "*Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación*".

de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.

2. *Factores de competencia en relación con acciones de tutela.* La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el *factor territorial*⁵, (ii) el *factor subjetivo*⁶ y (iii) el *factor funcional*⁷. Al respecto, esta Corte ha sostenido que, cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del referido factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, “*en virtud del criterio a prevención*”⁸, previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Esto, por cuanto “*existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover*”⁹. Asimismo, la Corte ha reiterado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse únicamente a partir del lugar de residencia de la parte accionante¹⁰, o al sitio donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales¹¹. En estos casos, la competencia corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la presunta vulneración o del lugar donde se producen los efectos, autoridad judicial que no necesariamente debe coincidir con el domicilio de las partes.

REITERACIÓN MEDIDA CAUTELAR Y PERJUICIO IRREMEDIABLE

Se reitera la solicitud de conceder la medida provisional, toda vez que el día de hoy la Escuela de tajo indico que no resolverá las solicitudes de corrección aun cuando esta expresamente regulada por el **ARTÍCULO 45 DEL CPACA**, donde se indica:

ARTÍCULO 45. CORRECCIÓN DE ERRORES FORMALES. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.

Lo están desconociendo y existe plena regulación, ahora bien tampoco resolverán las de **ADICIÓN Y CORRECCIÓN**, cuando se tiene sobre esto el **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, VEINTE (20) DE ENERO DE DOS MIL VEINTE (2020), RADICACIÓN NÚMERO: 11001-03-15-000-2019-05011-00(AC), ACTOR: MARÍA JOHANA TABORDA LEIVA,**

⁵ Auto 550 de 2018. En virtud del factor territorial, los jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o donde se producen sus efectos, son competentes para conocer, “*a prevención*”, del trámite de las acciones de tutela.

⁶ Auto 550 de 2018. Con fundamento en el factor subjetivo, corresponde: (i) a los jueces del circuito, el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz.

⁷ Auto 550 de 2018. El factor funcional “*debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia*”.

⁸ Auto 018 de 2019. Cfr. Autos 222 y 010 de 2020, 068 de 2018 y 053 de 2018, entre otros.

⁹ Autos 074 de 2016 y 277 de 2002.

¹⁰ Auto 460 de 2019 y 299 de 2013.

¹¹ Auto 460 de 2019 y 086 de 2007.

DEMANDADO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO, indico:

Del recuento que antecede, la Sala observa que las inquietudes planteadas por la accionante a través de su recurso de reposición, al coincidir con argumentos expuestos por otros participantes de la convocatoria, fueron agrupados en diferente temáticas, siendo atendidos cada uno de ellos; sin embargo, no ocurrió lo mismo con los pedimentos expuestos a través del escrito de ampliación del recurso, consistentes en:

«[...] PRIMERO: Se revise y se corrijan las preguntas números 61, 65, 98, 100 y 103, de la prueba de conocimiento, en el marco de la convocatoria número 27, para proveer el cargo de jueces y Magistrados, las cuales fueron contestadas de forma correcta por a suscrita, pero que la clave de coincidencia aportada por la Universidad es errónea.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se proceda a emitir una nueva calificación a la suscrita, teniendo en cuenta que las preguntas números 61, 65, 98, 100 y 103 constituyen aciertos, conforme a la marcación de la suscrita en la hoja de respuesta y lo expuesto en la presente solicitud. [...]».

Con fundamento en lo expuesto, ante la falta de respuesta de la administración a las solicitudes debidamente elevadas ante ella, lo cual constituye la vulneración no solo del derecho fundamental de petición sino también al debido proceso, la Sala ACCEDERÁ a la solicitud de amparo; razón por la cual, se ORDENARÁ a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura – Universidad Nacional de Colombia que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, decidan acerca de los pedimentos elevados por la señora María Johana Taborda Leiva en su escrito de ampliación del recurso de reposición, interpuesto contra la Resolución CJR19-0877 del 28 de octubre de 2019. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)


Sin perjuicio de lo expuesto, la Sala no desconoce el decir de las entidades accionadas en cuanto a no poder adelantar actuación alguna hasta tanto se resuelva lo pertinente acerca de la solicitud de aclaración dentro de la acción de tutela que ordenó una nueva exhibición de documentos¹²; frente a lo cual se advierte, que el decidir de fondo el recurso interpuesto por la accionante contra los resultados obtenidos en su prueba de conocimiento, no tiene injerencia alguna en la decisión constitucional que se pueda adoptar, pues lo que aquí se protege, no es cosa distinta que el derecho de cualquier ciudadano a obtener una respuesta de la administración con ocasión de los pedimentos que ante ella puede elevar.

De acuerdo a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

Para lo cual aporte las pruebas de que no resolverán:

Trazabilidad por orden cronológico


C

 Escalado

Descripción: Cordial saludo estimado (a) discente: con relación a su solicitud identificada con el número de ticket 26627, le confirmo que ha sido atendida y escalada al área correspondiente. Esperamos que nuestro soporte sea satisfactorio para usted.

Fecha: 18-11-2024

MS

 Resuelto

Descripción: Respetado Discente. En atención a su solicitud, le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa concluyó con la notificación de los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución EJR24-298, expedida por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

Fecha: 19-11-2024

Por lo tanto, debe ser concedida la medida cautelar y obligarlos resolver de manera congruente y sumar los untos que no han sumado, se reitera que se esta frente a un perjuicio irremediable, sobre la anterior urgencia es plenamente aplicable al caso concreto donde se observa un perjuicio irremediable, en este caso referente a la **CONVOCATORIA 27** la **CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA SU067 DEL VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), MAGISTRADA PONENTE: PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA**, indico:

La acción de tutela interpuesta en el proceso T-8.375.379 satisface el requisito de subsidiariedad. Es preciso indicar que la acción de tutela interpuesta por María Eugenia Rangel Guerrero no cuestionó la legalidad del acuerdo de convocatoria, como parecen entenderlo las autoridades judiciales que resolvieron su pretensión en el trámite de instancia. Por consiguiente, no es válido afirmar que debió encauzar su reclamación mediante los medios de control establecidos en la Ley 1437 de 2011. La demandante, por el contrario, solicitó que se le permita modificar el cargo para el cual se inscribió en la Convocatoria n.º 27; de este modo, procura satisfacer sus derechos fundamentales al acceso a los cargos públicos y al trabajo. Para tal efecto, ejerció su derecho fundamental de petición a través de la presentación del documento que dio inicio al proceso que aquí se revisa.

Habida cuenta de lo anterior, corresponde a la Sala Plena establecer si la respuesta negativa que obtuvo dicha solicitud implica una violación de su derecho fundamental al acceso a los cargos públicos, tal como la accionante lo pretende. En principio, este asunto podría ser planteado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. **Sin embargo, en el caso concreto se configura el supuesto del perjuicio irremediable. Esto es así dado que, teniendo en cuenta la duración de los procesos ante la justicia administrativa, es altamente probable que la decisión de esta pretensión sea dictada una vez ya haya concluido el concurso de méritos. En razón de lo anterior, la acción de tutela de la demandante será analizada bajo el supuesto de la necesidad de evitar un perjuicio irremediable.** (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

De igual forma el órgano de cierre en lo penal pues la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL MAGISTRADO PONENTE LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSASTP5284-2023 CIU 11001023000020230033500, RADICACIÓN #129939, TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS (2023)**, indico:

La Corte Constitucional, entonces, estableció específicamente tres reglas para la procedencia de la tutela contra los concursos de méritos de la Rama Judicial. La primera atinente a la inexistencia de un mecanismo judicial que permita reclamar la protección del derecho fundamental vulnerado. La segunda pauta se centra en la configuración de

un perjuicio irremediable, y la última, está relacionada con que el asunto planteado desborde las competencias del juez administrativo (Sentencia CC SU-067/2022).

En el presente asunto, atendidas sus precisas particularidades, la Sala advierte la procedencia de la acción de tutela para resolver el debate propuesto. Esto surge como resultado de la configuración inminente de un perjuicio irremediable, así como del tema constitucional planteado, el cual trasciende la esfera habitual de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y evidencia la vulneración de los derechos al debido proceso, acceso a cargos públicos, trabajo e igualdad. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Para la Corte resulta evidente que la espera prolongada de una decisión judicial al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho puede llevar al desconocimiento de los principios constitucionales de carrera administrativa y mérito. Estos pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho se ven amenazados, como se indicó, en situaciones en las que la sentencia podría retrasarse y consolidar la afectación que se pretende impedir. (TENGO MÁS DE DOS AÑOS DESDE QUE COLOQUE LA DEMANDA Y AUN NO SE TIENE PRIMERA AUDIENCIA)

Sumado a ello, la eventualidad de que ya no existan vacantes para ocupar un empleo igual o equivalente al aspirado también pone en evidencia los riesgos asociados con la dilatación de la actuación procesal. En tales circunstancias, aunque el afectado obtenga una determinación favorable, se encontraría ante la imposibilidad material de ocupar el cargo deseado. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Sobre casos así en los concursos de mérito la **CORTE CONSTITUCIONAL EN SENTENCIA T-052 MAGISTRADO PONENTE: DR. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, TREINTA (30) DE ENERO DE DOS MIL NUEVE (2009)**, indico:

En este caso, considera la Sala que, si bien el mecanismo ordinario para controvertir el acto administrativo en debate es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el anterior instrumento no resulta idóneo para garantizar la real y efectiva protección de los derechos del accionante toda vez que este procedimiento ordinario supone unos trámites que no concluirían de manera oportuna, es decir, antes de que se adopten las decisiones determinantes sobre el acceso a los cargos de notario para los cuales se concursó. (RESALTADO FUERA DE TEXTO ORIGINAL)

Con relación a la procedencia de la acción de tutela interpuesta como consecuencia de una irregularidad dentro de un concurso de mérito, esta Corporación ha sostenido que:

“En lo que hace referencia a los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la Corte ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela, a pesar de la presencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta última no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.” (Sentencia T-514 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández).^[21]

Por consiguiente, encuentra esta Sala procedente la acción de tutela interpuesta, como mecanismo principal. En este caso, la acción de tutela viene a suplir el espacio de desamparo o desprotección del derecho fundamental que deja el mecanismo alternativo de defensa judicial, por no ser adecuado y carecer del atributo de la eficacia requerida para la efectiva y real protección del referido derecho fundamental. Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

“La Corte, empero, encuentra necesario hacer la siguiente precisión: cuando el juez de tutela halle que existe otro mecanismo de defensa judicial aplicable al caso, debe evaluar si, conocidos los hechos en los que se basa la demanda y el alcance del derecho fundamental violado o amenazado, resultan debidamente incluidos TODOS los aspectos relevantes para la protección inmediata, eficaz y COMPLETA del derecho fundamental vulnerado, en el aspecto probatorio y en el de decisión del mecanismo alterno de defensa. Si no es así, si cualquier aspecto del derecho constitucional del actor, no puede ser examinado por el juez ordinario a través de los procedimientos previstos para la protección de los derechos de rango meramente legal, entonces, no sólo procede la acción de tutela, sino que ha de tramitarse como la vía procesal prevalente. Así como la Constitución no permite que se subplante al juez ordinario con el de tutela, para la protección de los derechos de rango legal, tampoco permite que la protección inmediata y eficaz de los derechos fundamentales, sea impedida o recortada por las reglas de competencia de las jurisdicciones ordinarias”.^[22]

Y se reitera ya van 20 despachos judiciales que han otorgado la medida cautelar en la acción de tutela.

ANEXOS

- Constancias de que la Escuela Judicial no otorgara los puntos que solicite mediante corrección ya que ni siquiera resolverá las solicitudes.

PRETENSIONES

Teniendo en cuenta los fundamentos facticos y de derecho que sustentan la presente acción de tutela, además del acervo probatorio que se recaude dentro del trámite de la acción, solicito acceder a las siguientes pretensiones:

TUTELAR mis derechos fundamentales al debido proceso, la confianza legítima, la buena fe y el acceso a cargos públicos, vulnerados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” y, en consecuencia, **ORDENAR** a la accionada que en un término improrrogable de 48 horas:

En virtud de la negativa a sumar los puntos solicitados en la **CORRECCIÓN EXPIDA** un acto administrativo en el que: *i)* reconozca como acertadas las respuestas que di a las preguntas referidas en los argumentos indicados en la presente acción constitucional en concordancia con la solicitud de **ADICIÓN Y ACLARACION** *ii)* disponga la **CORRECCIÓN ARITMÉTICA** de las preguntas que me fueron otorgadas y no sumadas *iii)* **DISPONGA** mi **inclusión definitiva o transitoria** en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial).

Subsidiariamente y en el evento de no considerarse la anterior orden, pido que se **DISPONGA** mi inclusión provisional en la subfase especializada del curso concurso de formación judicial (IX curso de formación judicial), hasta que un juez ordinario resuelva la demanda que, en ese evento, presentaré contra los resultados de la subfase general del mencionado curso de formación judicial.

Para ello, **pido tener en cuenta las mismas razones que expuse frente a la medida provisional solicitada**, pues lo pedido no resulta oneroso para la autoridad accionada, dado que ya tiene contratada la subfase especializada para la totalidad de los docentes que iniciamos la subfase general; es decir, incluirme provisionalmente en la subfase especializada, no implica para la accionada realizar una contratación diferente a la existente ni un desembolso o afectación presupuestal distinto a lo ya previsto.

Además, si mis reclamos se llegaren a descartar en un eventual proceso ordinario, la autoridad accionada no vería afectado su patrimonio por lo aquí pedido; situación que no ocurriría si mis reclamos son aceptados —como estoy convencido que son— y para ese momento no he realizado la subfase especializada, pues me causaría un perjuicio, dada la posición desigual y desventajosa en la que quedaría frente a los concursantes que inician dicha subfase el próximo **16/11/2024**, dadas las consecuencias que ello trae frente a la conformación del registro de elegibles. Téngase en cuenta que, la subfase especializada será evaluada a más tardar el 30 de julio

de 2025, término que, conforme a las reglas de la experiencia es muy inferior al de duración razonada del proceso ordinario que instauraría si no se accede a mi pretensión principal.

ANEXOS

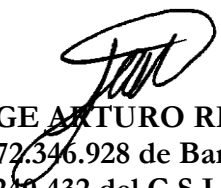
- Providencia proferida por el JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA dentro de la radicación 08-001-33-33-013-2023-00184-00.
- Providencia fechada 23 de octubre del 2023 proferida por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE PASTO dentro de la radicación 52-001-33-33-005-2023-00202.
- Providencia fechada 19 de octubre del 2023 proferida por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA dentro de la radicación 150013333003-2023-00139-00.

DIRECCIONES Y NOTIFICACIONES

AL ACCIONANTE: Calle 53D #19-77 Barranquilla Atlántico.

Mail: jriversejada@hotmail.com.

Celular: 3008397537



JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
C.C 72.346.928 de Barranquilla
T.P 240.432 del C.S.J



Escuela Judicial
"Rigoberto Lara Bonilla"

Ticket #26627 Resuelto

Información del Ticket

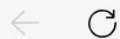
OTROS

Descripción: Yo, JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía nro. 72.346.928, portador de la tarjeta profesional 240.432 del CSJ, en mi propia representación presento SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN Y ADICION de la resolución nro. EJR24-725 Mediante la cual resolvió mi recurso de reposición contra la resolución nro. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, "por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial", corregida por medio de la resolución EJR24-317 de 28 de junio de 2024, dejando claridad que el TÉRMINO DE LA NOTIFICACIÓN FINIQUITA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023, de conformidad al cronograma tal como se muestra a continuación:

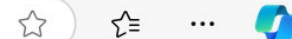
JA

- 🔔 Prioridad: Media
- 📁 Grupo: Tutor
- 📌 Origen: Otro
- [Ver Adjunto](#)

Nombres: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
Institución Educativa: 72346928
Correo: jriveratejada@hotmail.com
Fecha: 18-11-2024
Celular: 3008397537



https://soporte.ix-cursoformacionjudicial.com/login/26627



Rama Judi
Consejo Su
República

Institución Educativa: 72346928

Correo: jrivertejada@hotmail.com

Fecha: 18-11-2024

Celular: 3008397537

Trazabilidad por orden cronologico

Escalado

C

Descripción: Cordial saludo estimado (a) discente: con relación a su solicitud identificada con el número de ticket 26627, le confirmo que ha sido atendida y escalada al área correspondiente. Esperamos que nuestro soporte sea satisfactorio para usted.

Fecha: 18-11-2024

Resuelto

MS

Descripción: Respetado Discente. En atención a su solicitud, le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa concluyó con la notificación de los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución EJ24-298, expedida por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

Fecha: 19-11-2024

Modulo de Tickets



ESP
LAA



11:37 AM
11/19/2024



Ticket #26361 Resuelto

Información del Ticket

OTROS

Descripción: Yo, JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía nro. 72.346.928 , presento SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN Y ADICION de la resolución nro. EJR24-725 Mediante la cual resolvió mi recurso de reposición contra la resolución nro. EJR24-298 de 21 de junio de 2024, "por medio de la cual se publican los resultados de la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial", corregida por medio de la resolución EJR24-317 de 28 de junio de 2024, dejando claridad que el término de la notificación finiquita el 15 de noviembre del 2023 y es a partir de allí que corre el termino por lo tanto puedo complementarla mientras me encuentre en el mismo, de igual forma la presente solicitud no es extemporánea por anticipada, superado lo anterior.

Nombres: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA

Institución Educativa: 72346928

Correo: jriversejada@hotmail.com

Fecha: 15-11-2024

Celular: 3008397537

Prioridad: Media

Grupo: Tutor

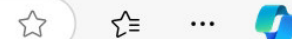
Origen: Otro

[Ver Adjunto](#)

JA



https://soporte.ix-cursoformacionjudicial.com/login/26361



Institución Educativa: 72346928

Correo: jrivertejada@hotmail.com

Fecha: 15-11-2024

Celular: 3008397537

Trazabilidad por orden cronologico

Escalado



Descripción: Cordial saludo estimado (a) discente: con relación a su solicitud, le confirmo que ha sido atendida y escalada al área correspondiente. Esperamos que nuestro soporte sea satisfactorio para usted.

Fecha: 15-11-2024

Resuelto



Descripción: Respetado Discente. En atención a su solicitud, le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa concluyó con la notificación de los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución EJ24-298, expedida por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

Fecha: 15-11-2024



ESP
LAA



11:39 AM
11/19/2024



Ticket #26346 **Resuelto**

Información del Ticket

OTROS

Descripción: Yo, JORGE ARTURO RIVERA TEJADA, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 72.346.928, presento inicialmente SOLICITUD DE CORRECCIÓN ARITMÉTICA de la RESOLUCIÓN N.º EJR24-725 "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución EJR24- 298 del 21 de junio de 2024, corregida por la Resolución EJR24-317 del 28 de junio de 2024", por economía procesal en este mismo escrito elevo SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN de la misma cuya procedibilidad y fundamentos de la misma sustento en su correspondiente acápite, la presente solicitud se envía a los correos arriba indicados toda vez que no tengo acceso al campus, posteriormente a esta solicitud se radicara una SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O ACLARACIÓN la cual debe ser resulta de manera conjunta y si el puntaje final supera los 800 puntos se debe realizar la REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO y otorgar la calidad de aprobado con las consecuentes consecuencias.

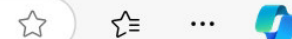
Nombres: JORGE ARTURO RIVERA TEJADA
Institución Educativa: 72346928
Correo: jriveratejada@hotmail.com

Prioridad: Media
 Grupo: Tutor
 Origen: Otro
Ver Adjunto

JA



https://soporte.ix-cursoformacionjudicial.com/login/26346



Institución Educativa: 72346928

Correo: jrivatejada@hotmail.com

Fecha: 14-11-2024

Celular: 3008397537

Trazabilidad por orden cronologico

Escalado



Descripción: Cordial saludo estimado (a) discente: con relación a su solicitud, le confirmo que ha sido atendida y escalada al área correspondiente. Esperamos que nuestro soporte sea satisfactorio para usted.

Fecha: 15-11-2024

Resuelto



Descripción: Respetado Discente. En atención a su solicitud, le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa concluyó con la notificación de los actos administrativos que resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución EJ24-298, expedida por la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla".

Fecha: 15-11-2024



ESP
LAA



11:39 AM
11/19/2024

